

riales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

El Instituto y la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León colaborarán en los términos de este Convenio a lo largo de todo el procedimiento previsto en la mencionada Orden para la concesión de las subvenciones.

Segunda.—En relación con los proyectos para los cuales se vaya a solicitar la ayuda contemplada en la Orden de 6 de marzo de 1998, y cuya ejecución se prevea en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se compromete a emitir, a instancia del interesado, certificaciones relativas al grado de ejecución de los proyectos, previas a la solicitud. En ellas deberá indicarse expresamente si el grado de realización del proyecto o gasto asociado al mismo, previo a la solicitud de ayuda, supera o no el 25 por 100 de la inversión prevista.

Asimismo, la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se compromete a exigir la presentación por el interesado de las valoraciones a las que se refiere el punto 2 del apartado decimocuarto de la Orden respecto a la adquisición de activos con vida útil inferior a la inicial. En estas valoraciones se hará especial hincapié en el grado de obsolescencia técnica y garantías de seguridad de los trabajadores.

Tercera.—Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, el Instituto remitirá, en el plazo de quince días naturales a partir de su recepción, los proyectos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se compromete a remitir al Instituto, en el plazo de veinte días naturales a partir de la fecha de recepción de los proyectos, un informe previo de priorización de las solicitudes de concesión de ayudas para proyectos empresariales que se vayan a ejecutar en su Comunidad Autónoma.

Esta priorización se realizará conforme a los criterios recogidos en el apartado decimotercero de la Orden de 6 de marzo de 1998 y a los criterios generales para la selección de proyectos que establezca el Instituto.

Asimismo, la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, a solicitud del Instituto, elaborará informes sobre cualquier aspecto que sea planteado en relación con los proyectos para los que se hayan solicitado ayudas y estén incluidos en su ámbito territorial. Estos informes, que podrán incluir también cualquier aspecto que la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León considere de interés, habrán de remitirse al Instituto en el plazo que se fije en cada caso.

Una vez resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones, el Instituto se compromete a remitir a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León copia de la resolución definitiva, notificada al interesado, respecto de aquellos proyectos incluidos en su ámbito territorial.

Cuarta.—El Instituto remitirá puntualmente a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León toda la información relevante para el adecuado cumplimiento de las funciones que le son encomendadas por el presente Convenio.

La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se compromete a llevar a cabo el control y seguimiento de los proyectos incluidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que resulten beneficiarios de las ayudas recogidas en la Orden de 6 de marzo de 1998.

A tal efecto, por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se emitirán las certificaciones que resulten necesarias de acuerdo con la Orden de 6 de marzo de 1998 y con la resolución de concesión de la ayuda, para acreditar el cumplimiento de los requisitos que resulten exigibles, especialmente en materia de inversión, creación y mantenimiento de empleo, a los efectos económicos que derivan de la concesión de la ayuda.

Asimismo, a partir de la fecha de la resolución de concesión de las ayudas, la Agencia remitirá al Instituto, al menos con periodicidad semestral, un informe relativo a cada proyecto que permita realizar un seguimiento de su grado de ejecución.

Dicho informe hará referencia a los siguientes aspectos:

Grado de ejecución de la inversión y de adecuación de lo ejecutado a lo previsto en el proyecto para el que se concedió la subvención.

Grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de ayuda, con especial referencia al empleo creado.

Dificultades surgidas, en su caso, y perspectivas de superación de las mismas.

Estado de situación respecto a otras ayudas públicas relacionadas con el proyecto, realizando una distinción entre las solicitadas, las concedidas y las percibidas.

Cualquier otro aspecto que se considere de interés.

Lo previsto en esta cláusula se extenderá también a los proyectos de naturaleza empresarial subvencionados de acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de febrero de 1996, sobre ayudas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón.

No obstante lo dispuesto en esta cláusula, el Instituto podrá efectuar todas las actuaciones de inspección, comprobación y verificación que estime necesarias.

Quinta.—La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se compromete a colaborar con el Instituto en la realización de estudios del impacto que tienen las ayudas concedidas a la iniciativa empresarial sobre la economía de las zonas mineras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contribuyendo así a mejorar en un futuro los criterios de selección de los proyectos.

Sexta.—Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, sin personalidad jurídica, que tendrá las siguientes funciones:

a) El seguimiento de la aplicación del presente Convenio y de todas aquellas actuaciones que se deriven del mismo.

b) El estudio de los problemas surgidos en relación a los proyectos, así como de las posibles soluciones de los mismos.

c) Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.

d) Interpretar el presente Convenio y dar solución a las dudas y controversias que pudieran producirse para el cumplimiento del mismo.

La Comisión de Seguimiento estará formada por el Gerente del Instituto, que la presidirá, y por tres representantes de cada una de las partes firmantes, actuando como Secretario uno de los representantes del Instituto. Las decisiones en el seno de esta Comisión se tomarán por mayoría de votos de sus miembros.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a convocatoria de su Presidente, cuando lo solicite alguna de las partes firmantes.

Séptima.—El presente Convenio extenderá su vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2000, prorrogándose tácitamente por períodos anuales salvo denuncia expresa de las partes. Asimismo, podrá producirse su resolución por mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último supuesto, la parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de la otra al menos con dos meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto.

Octava.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas en este Convenio, se aplicarán las normas de Derecho administrativo cuando así sea necesario.

Novena.—Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula sexta serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.—El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, José Manuel Serra Peris.—El Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, Tomás Villanueva Rodríguez.

## 7816

*RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2000, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y el Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias, en materia de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.*

Habiéndose suscrito, con fecha 27 de julio de 1998, el Convenio de colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias, en materia de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras en el marco del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto

en el punto 9.º de Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, ha dispuesto se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el texto del Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Director general, P. S. (Resolución de 29 de febrero de 2000), el Gerente, Juan Miguel Benítez Torres.

#### ANEXO

### **Convenio de colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias, en materia de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras**

En Oviedo, a 27 de julio de 1998.

#### REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Nemesio Fernández-Cuesta, Secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales, nombrado por Real Decreto 939/1996, de 10 de mayo, actuando como Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en ejercicio de la competencia atribuida por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, en la redacción dada al mismo por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998.

De otra, el excelentísimo señor don José Antonio González García-Portilla, Presidente del Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias, nombrado por Decreto 34/1996, de 26 de julio.

Todos se reconocen en la representación que ostentan capacidad para formalizar el presente Convenio, y, a tal efecto,

#### EXPONEN

Que el fomento de la inversión empresarial constituye uno de los motores fundamentales del proceso de desarrollo, reactivación y diversificación de la actividad de las zonas mineras.

Que la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 6 de marzo de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, tiene como objetivo esencial compensar la incidencia negativa que sobre el producto y nivel de empleo lleva consigo el proceso de reestructuración de la actividad de minería del carbón y reducir la dependencia del sistema productivo de aquellas áreas respecto a una sola actividad.

Que el apartado décimo de la citada Orden establece la posibilidad de suscribir Convenios de colaboración con las Agencias de Desarrollo Regional de las Comunidades Autónomas, que tendrán la consideración de entidades colaboradoras.

Que mediante el presente Convenio de colaboración se pretenden establecer los instrumentos que permitan la consecución de la mayor eficacia y agilidad en la concesión de ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo, así como la mayor eficacia en el desarrollo de la labor de seguimiento y control de los proyectos que reciban las ayudas previstas en la citada Orden de 6 de marzo de 1998.

Que las entidades firmantes actúan en el ejercicio de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.13.º en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias por el artículo 10.1.j) de su Estatuto de Autonomía.

Por ello, las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias, acuerdan suscribir el presente Convenio, con las siguientes

#### CLÁUSULAS

Primera.—Constituye el objeto del presente Convenio establecer el cauce de colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al que en adelante se hará referencia con el término «el Instituto», y el Instituto de Fomento Regional para la concesión, seguimiento y control de las ayudas contempladas en la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 6 de marzo de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

El «Instituto» y el Instituto regional colaborarán en los términos de este Convenio a lo largo de todo el procedimiento previsto en la mencionada Orden ministerial para la concesión de las subvenciones.

Segunda.—En relación con los proyectos para los cuales se vaya a solicitar la ayuda contemplada en la Orden de 6 de marzo de 1998, y cuya ejecución se prevea en el ámbito territorial del Principado de Asturias, el Instituto de Fomento Regional se compromete a emitir, a instancia del interesado, certificaciones relativas al grado de ejecución de los proyectos, previas a la solicitud. En ellas deberá indicarse expresamente si el grado de realización del proyecto o gasto asociado al mismo, previo a la solicitud de ayuda, supera o no el 25 por 100 de la inversión prevista.

Asimismo, el Instituto de Fomento Regional se compromete a realizar a solicitud del interesado las valoraciones a las que se refiere el punto 2 del apartado decimocuarto de la Orden respecto a la adquisición de activos con vida útil inferior a la inicial. En estas valoraciones se hará especial hincapié en el grado de obsolescencia técnica y garantías de seguridad de los trabajadores.

Tercera.—Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, el «Instituto» remitirá, en el plazo de quince días naturales a partir de su recepción, los proyectos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Asturias.

El Instituto de Fomento Regional se compromete a remitir al «Instituto», en el plazo de veinte días naturales a partir de la fecha de recepción de los proyectos, un informe previo de priorización de las solicitudes de concesión de ayudas para proyectos empresariales que se vayan a ejecutar en el Principado.

Esta priorización se realizará conforme a los criterios recogidos en el apartado decimotercero de la Orden de 6 de marzo de 1998 y a los criterios generales para la selección de proyectos que establezca el «Instituto».

Asimismo, el Instituto de Fomento Regional, a solicitud del «Instituto», elaborará informes sobre cualquier aspecto que sea planteado en relación con los proyectos para los que se hayan solicitado ayudas y estén incluidos en su ámbito territorial. Estos informes, que podrán incluir también cualquier aspecto que el Instituto de Fomento Regional considere de interés, habrán de remitirse al «Instituto» en el plazo que se fije en cada caso.

Una vez resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones, el «Instituto» se compromete a remitir al Instituto de Fomento Regional copia de la resolución definitiva, notificada al interesado, respecto de aquellos proyectos incluidos en su ámbito territorial.

Cuarta.—El «Instituto» remitirá puntualmente al Instituto de Fomento Regional toda la información relevante para el adecuado cumplimiento de las funciones que le son encomendadas por el presente Convenio.

El Instituto de Fomento Regional se compromete a llevar a cabo el control y seguimiento de los proyectos incluidos en el ámbito territorial del Principado de Asturias y que resulten beneficiarios de las ayudas recogidas en la Orden de 6 de marzo de 1998.

A tal efecto, por el Instituto de Fomento Regional se emitirán las certificaciones que resulten necesarias, de acuerdo con la Orden de 6 de marzo de 1998 y con la resolución de concesión de la ayuda, para acreditar el cumplimiento de los requisitos que resulten exigibles, especialmente en materia de inversión, creación y mantenimiento de empleo, a los efectos económicos que derivan de la concesión de la ayuda.

Asimismo, a partir de la fecha de la resolución de concesión de las ayudas, el Instituto de Fomento Regional remitirá al «Instituto», al menos con periodicidad semestral, un informe relativo a cada proyecto que permita realizar un seguimiento de su grado de ejecución.

Dicho informe hará referencia a los siguientes aspectos:

Grado de ejecución de la inversión y de adecuación de lo ejecutado a lo previsto en el proyecto para el que se concedió la subvención.

Grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de ayuda, con especial referencia al empleo creado.

Dificultades surgidas, en su caso, y perspectivas de superación de las mismas.

Estado de situación respecto a otras ayudas públicas relacionadas en el proyecto, realizando una distinción entre las solicitudes, las concedidas y las percibidas.

Cualquier otro aspecto que se considere de interés.

Lo previsto en esta cláusula se extenderá también a los proyectos de naturaleza empresarial subvencionados de acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de febrero de 1996, sobre ayudas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón.

No obstante lo dispuesto en esta cláusula, el «Instituto» podrá efectuar todas las actuaciones de inspección, comprobación y verificación que estime necesarias.

Quinta.—El Instituto de Fomento Regional se compromete a colaborar con el «Instituto» en la realización de estudios del impacto que tienen las ayudas concedidas a la iniciativa empresarial sobre la economía de las zonas mineras del Principado de Asturias, contribuyendo así a mejorar en un futuro los criterios de selección de los proyectos.

Sexta.—Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, sin personalidad jurídica, que tendrá las siguientes funciones:

- El seguimiento de la aplicación del presente Convenio y de todas aquellas actuaciones que se deriven del mismo.
- El estudio de los problemas surgidos en relación a los proyectos, así como de las posibles soluciones a los mismos.
- Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
- Interpretar el presente Convenio y dar solución a las dudas y controversias que pudieran producirse para el cumplimiento del mismo.

La Comisión de Seguimiento estará formada por el Gerente del «Instituto», que la presidirá, y por tres representantes de cada una de las partes firmantes, actuando como Secretario uno de los representantes del «Instituto». Las decisiones en el seno de esta Comisión se tomarán por mayoría de votos de sus miembros.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a convocatoria de su Presidente, cuando lo solicite alguna de las partes firmantes.

Séptima.—El presente Convenio extenderá su vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre del año 2000, prorrogándose tácitamente por períodos anuales salvo denuncia expresa de las partes. Asimismo, podrá producirse su resolución por mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último supuesto, la parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de la otra, al menos, con dos meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto.

Octava.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas en este Convenio se aplicarán las normas del Derecho Administrativo cuando así sea necesario.

Novena.—Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula sexta, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.—El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Nemesio Fernández-Cuesta.—El Presidente del Instituto de Fomento Regional, José Antonio González García-Portilla.

## MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

**7817** *RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 1999, por la que se da publicidad al Convenio Específico entre el INIA y la Junta de Andalucía, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995.*

Advertidos errores en el texto del Convenio Específico entre el INIA y la Junta de Andalucía, publicado por Resolución del INIA de 25 de noviembre de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» número 9, de 11 de enero de 2000,

Esta Presidencia, resuelve proceder a la rectificación de los citados errores:

En la página 1100. Anexo III:

En la penúltima línea, de la columna segunda, donde dice: «Actividades permanentes», debe suprimirse.

En la misma línea, en la tercera columna, donde dice: «7.568», debe suprimirse.

En la última línea —Total—, donde dice: «25.026», debe decir: «17.458».

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Presidente, Francisco José Simón Vila.

**7818** *RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 1999, por la que se da publicidad al Convenio Específico entre el INIA y la Diputación General de Aragón en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995.*

Advertidos errores en el texto del Convenio Específico entre el INIA y la Diputación General de Aragón, publicado por Resolución del INIA de 25 de noviembre de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» número 9, de 11 de enero de 2000,

Esta Presidencia, resuelve proceder a la rectificación de los citados errores:

En la página 1102. Anexo III:

En la penúltima línea, de la columna segunda, donde dice: «Actividades permanentes», debe suprimirse.

En la misma línea, en la tercera columna, donde dice: «3.310», debe suprimirse.

En la última línea —Total—, donde dice: «16.488», debe decir: «13.178».

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Presidente, Francisco José Simón Vila.

**7819** *RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 1999, por la que se da publicidad al Convenio Específico entre el INIA y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995.*

Advertidos errores en el texto del Convenio Específico entre el INIA y el Instituto Canario de Investigaciones (ICIA) de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado por Resolución del INIA de 25 de noviembre de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» número 9, de 11 de enero de 2000,

Esta Presidencia, resuelve proceder a la rectificación de los citados errores:

En la página 1104. Anexo II:

En la penúltima línea, de la columna segunda, donde dice: «Actividades permanentes», debe suprimirse.

En la misma línea, en la tercera columna, donde dice: «1.570», debe suprimirse.

En la última línea —Total—, donde dice: «2.461», debe decir: «891».

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Presidente, Francisco José Simón Vila.

**7820** *RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 1999, por la que se da publicidad al Convenio Específico entre el INIA y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, y las Órdenes de 23 de abril de 1993 y 29 de junio de 1995.*

Advertidos errores en el texto del Convenio Específico entre el INIA y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publicado por Resolución del INIA de 25 de noviembre de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» número 9, de 11 de enero de 2000,